



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Informe Firma Conjunta Transferible

Número:

Referencia: TFN N° 27.115-A Sarkis Kircos SACIFI

AUTOS Y VISTOS:

El expediente N° 27.115-A, caratulado “**SARKIS KIRCOS S.A.C.I.F.I. C/ Dirección General de Aduanas s/ apelación**”, y

CONSIDERANDO:

I.- Que regresan estos autos a conocimiento del Tribunal Fiscal, en virtud del pronunciamiento emitido, en fecha 18/08/22, por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (ver fs. 322/323) que ordenó la remisión de la causa a este Tribunal de origen a los efectos de que se expida en relación con el fondo de la cuestión debatida.

En efecto el Tribunal de Alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el servicio aduanero y revocó el decisorio de este Tribunal Fiscal de fecha 18/08/22 en cuanto había declarado prescripta la acción del Fisco para imponer penas.

Para así decidir, en su sentencia el Tribunal de Alzada explica que el Tribunal Fiscal de la Nación se apartó del precedente de la CSJN dictado en la causa “Wonderland SRL c/ Aduana de Rosario” el 12/05/09, como así también del fallo plenario de la Excma. Cámara en autos “Hughes Tool S.A.” del 23/09/03 en el sentido de que interrumpe el curso de la prescripción el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera, independientemente de que tal decisión sea notificada o no.

En esa línea, el Tribunal de Alzada sostuvo que la resolución condenatoria fue dictada el 18/11/08 por lo que tuvo lugar una nueva causal de interrupción de la prescripción de la acción para imponer penas (art. 937, inciso d) del Código Aduanero). Añadió que la referida norma considera como causal de interrupción de la prescripción el dictado de la resolución, sin necesidad de que sea notificada para tener virtud interruptiva.

Así las cosas, la Excma. Cámara estimó que este Tribunal Fiscal omitió pronunciarse respecto a los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación. Puntualmente en cuanto a la procedencia o improcedencia de la sanción aplicada por el servicio aduanero.

En tales condiciones, el Tribunal de Alzada reenvió la causa a este Tribunal Fiscal para que se pronuncie sobre los aspectos de fondo señalados, de conformidad con lo establecido por el artículo 1180, inciso a), del Código Aduanero.

II.- Que, en lo relativo al fondo del asunto, cabe recordar que por la Resolución (DE PRLA) N° 7669/08, de fecha 18/11/08, el Jefe del Depto. de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, en el trámite del sumario ADGA 603.682/03 (Actuación SIGEA N° 12034-263-2005), resolvió condenar a la firma “SARKIS KIRCOS S.A.C.I.F.I.” al pago de una multa que asciende a la suma de \$7.942.- y, asimismo, le exigió el pago de tributos por un monto de \$ 21.673,87.- más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) e intereses por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero en relación a la DIT N° 91-9/97 cuyo vencimiento operó el 3/01/98.

III.- Que, ante todo, cabe aclarar que este Tribunal Fiscal ya se ha expedido respecto de la responsabilidad tributaria que le cabe a la firma recurrente respecto de las obligaciones inherentes al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria respecto de la DIT N° 91-9/97. Al respecto, pueden verse los Considerandos XIII al XVIII de la sentencia de este Tribunal Fiscal de fecha 3/07/17 que luce a fs. 274/283vta de autos. En la referida sentencia, se sostuvo que “...habiéndose vencido el plazo acordado para la exportación o importación a consumo de 875 kg., de mermas, debe considerarse a esa mercadería importada para consumo y a la aquí recurrente como responsable de la correspondiente obligación tributaria por esa cantidad”.

Que, para así decidir, este Tribunal Fiscal compulsó los permisos de embarque acompañados (nros. 85916/6, 141064/7, 141529/1 y 168172/6) de donde surgía que en la hoja de descarga la recurrente declaró cancelar la mercadería importada por medio de la DIT 91-9/97 por la cantidad total de 17.500 kg., aunque sin tener en consideración las mermas y pérdidas. Se señaló que las mermas se distinguen de las pérdidas en el Certificado de Tipificación y Clasificación sin que esa distinción sea meramente formal. Y que esa distinción implica, a su vez, un tratamiento distinto que viene dado por la Resolución M.E.O.S.P. N° 72/92 que en su art. 18 considera a las pérdidas como las mermas, residuos y sobrantes irre recuperables, no estando por ello sujetos al tratamiento arancelario de importación para consumo. No obstante, en aquellos casos en que se determine que los residuos y sobrantes tienen valor comercial, los mismos estarán sujetos a valoración aduanera y deberán exportarse o importarse para consumo dentro de los TRES (3) meses de realizada la última exportación, con lo cual se habrá cumplido la obligación impuesta en el régimen.

Para concluir, el Tribunal sostuvo que si el argumento de la recurrente respecto de las mermas fuera cierto, en el sentido de que son sobrantes irre recuperables e inutilizables, deberían haberse incluido dentro del porcentaje de pérdidas tal como lo expresa el mencionado artículo 18 de la Resolución M.E.O.S.P. N° 72/92 y no, por separado, como “mermas”. De esa manera, se considera que tienen un valor comercial y que deben, por ende, exportarse o importarse para consumo, lo que la recurrente no hizo.

IV.- Que corresponde ahora referirse a la responsabilidad infraccional de la firma recurrente tal como fuera ordenado por el Tribunal de Alzada.

Que, en la especie, se le imputa a la recurrente la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el art. 970 del C.A., en tanto no habría cumplido, en tiempo y forma, con la reexportación de la totalidad de la mercadería amparada por la DIT N° 91-9/97.

Que la norma en cuestión sanciona el incumplimiento de las obligaciones asumidas con motivo del otorgamiento del régimen de importación temporaria. La obligación asumida por la actora al importar temporariamente, era la

de reexportar para consumo la mercadería bajo la nueva forma resultante y/o importarla para consumo antes del vencimiento del plazo otorgado por la aduana.

Que, como he señalado en el Considerando anterior, la recurrente no ha cumplido con la reexportación o importación a consumo de 875 kilogramos de mermas correspondientes a la mercadería importada temporariamente al amparo de la DIT N° 91-9/97. Por lo expuesto, resultaría ajustado a derecho condenar a la recurrente toda vez que no puede justificarse la exclusión de la responsabilidad infraccional que le cabe como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la cantidad 875 kilogramos de mermas correspondientes a la DIT N° DIT N° 91-9/97.

V.- Que pese a la decisión de condenar a la firma recurrente, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, en atención a la insignificancia del monto de la multa de una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo, cuyo valor asciende a la suma de \$500,45 (ver la liquidación practicada por este Tribunal Fisco en el Considerando XVIII de la sentencia de fecha 3/7/23), considero que debe dejarse sin efecto el reclamo por dicho concepto, por aplicación del principio de bagatela.

Ello no significa que la firma recurrente haya configurado la infracción investigada en autos, sino que la aplicación de la multa deviene prescindible para la sociedad por la insignificancia pecuniaria y el costo administrativo que irrogaría su percepción.

VI.- Que, en tal sentido, corresponde destacar que el principio de bagatela ha sido aplicado inveteradamente por el Tribunal Fiscal de la Nación, en supuestos en los que se analizó la procedencia de aplicar sanciones cometidas en infracciones aduaneras ante incumplimientos de importaciones suspensivas, entre los que, sólo a modo de ejemplo, se pueden mencionar las sentencias dictadas por la Sala “E” (en su anterior composición) en los expedientes no 17.847-A, “REGA S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, del 18/02/2004, y n° 18.188-A, “POLIMETAL S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; sentencia del 26/08/2004, siendo que en ambos pleitos se revocaron las resoluciones aduaneras condenatorias.

En el sentido -revocatorio- se ha expedido esta Sala “F” en los expedientes no 32.184-A, “MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S.R.L c/ D.G.A. s/ apelación”, n° 29.748-A, “MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, ambas del 1° de marzo de 2017, y en el Expte. Nro. 35.247-A, caratulado “ASEGURADORES DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, al que se encontraba acumulado el expediente n° 35.279-A caratulado “DANCAN S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, del 3 de noviembre de 2016, que tramitara por ante esta Vocalía de la 16° Nominación (voto del Dr. Garbarino, al que adhirieron los Dres. González Palazzo y Basaldúa).

Y en idéntico modo se pronunció la Sala “G” en los expedientes n° 19.223-A, “Y A BASILE SAICE C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; sentencia del 18/03/2014 y n° 24.515-A, “AGRO ACEITUNERA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”. Por otra parte, en el mismo sentido también se ha expedido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al sostener “...Que el principio que en materia penal se ha dado en denominar de bagatela o irrisoriedad o insignificancia es aquél en virtud del cual deben considerarse atípicas aquellas conductas que si bien por su exteriorización resultan encuadrables en la descripción de un tipo legal, han afectado de modo insignificante, irrelevante o manifiestamente menor al bien jurídico que la norma tiene como fin tutelar. Su creación es eminentemente pretoriana por vía jurisdiccional.”.

Además, la Alzada sostuvo que “Atento la ínfima cantidad de mercadería en infracción, en pos de dotar de plena vigencia a los principios básicos del derecho penal y los principios y garantías fundamentales reconocidos por la

Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, es que se impone mantener la decisión recurrida, pues la afectación del bien jurídico tutelado es tan escasa que no es posible aplicar una pena sin afectar la proporcionalidad que debe guardar con el disvalor jurídico de la conducta típica que contempla el art. 970 del Código Aduanero. Es que la cantidad de mercadería en infracción es tan intrascendente, que aplicar una multa a su respecto conllevaría transgredir el principio de reserva del art. 19 de la Constitución Nacional. Por lo demás, tampoco se justifica el despliegue de actividad jurisdiccional ni administrativa que requiere perseguir el cobro de los tributos aduaneros que gravarían tan irrisoria cantidad.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Anilinas Americanas Versanil S.A.” c. DGA”, causa N° 36215/12, del 19/11/2013).

Que, por último, cabe destacar que dicha doctrina ha sido aplicada por la propia competencia impositiva de este Tribunal Fiscal in re “Lemesoff, Néstor Mario” (Sala C, sentencia de fecha 12/7/99); como así también por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires en los expedientes no 2360-0368336, “FRIGORÍFICO RYDHANS S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, sentencia de fecha 28/02/19 y n° 2360-214941 caratulado “MOLINO OLAVARRIA S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, sentencia de fecha 31/08/21, siendo que, en ambos casos, el mencionado Tribunal dispuso revocar las disposiciones condenatorias emanadas del organismo fiscal local.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Revocar los arts. 1 y 2 de la Resolución (DE PRLA) N° 7669/08, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12034-263-2005, por expresa aplicación del principio de insignificancia, con costas.

Regístrese. Notifíquese a la DGA y a la actora por edictos por 3 (tres) días. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.

Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).